

# Centros de reeducación en Xinjiang para «amar a China»

- EL MUNDO se adentra en la provincia de mayoría uigur, bajo el férreo control de Pekín
- La narrativa oficial tacha de «mentiras» las denuncias de internamientos forzosos



LUCAS DE LA CAL  
TURPAN (XINJIANG)

A mitad de camino entre las Montañas Flameantes y el desierto de Kumtag, hay una pequeña aldea reconvertida en una especie de parque temático uigur que miles de chinos, sobre todo de la mayoritaria etnia han, visitan cada año para hacerse fotos bajo un paisaje árido rodeado de viñedos, con decenas de casas de barro y un bazar donde venden colgantes, alfombras y bollos rellenos de cordero.

Mazha, situado en medio de un oasis, es conocido por ser el pueblo uigur más antiguo de la provincia de Xinjiang, con una historia de 2.600 años y una mezquita de 2.000 metros cuadrados construida durante la dinastía Qing (siglo XVIII). Allí viven ahora 65 familias autóctonas, aunque tienen sus casas fuera del recinto turístico, encima de una colina, y la policía custodia la entrada para que ningún visitante les moleste.

«¿Haces fotos a mis hijas porque son uigures? ¿Quién te ha dado permiso? No somos animales a los que puedes fotografiar sin preguntar», suelta una señora a una chica joven que lleva un buen rato persiguiendo con su móvil a dos niñas. «Respétanos y déjanos en paz. Nosotras también estamos haciendo turismo», insiste enfadada la señora.

La aldea de Mazha se encuentra en la región de Turpan, un histórico tramo de la antigua Ruta de la Seda a 180 kilómetros al sureste de la ciudad de Urumqi, capital de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, un vasto territorio de desiertos y montañas cuatro veces más grande que España.

En 2018, en el valle donde está Mazha se grabaron algunas escenas del remake de Mulan que se estrenó en septiembre del año pasado con una campaña de boicot detrás. Disney, en los créditos finales de la película, daba las «gracias especiales» a ocho entidades gubernamentales en Xinjiang. Entre ellas estaba la oficina de seguridad pública de Turpan,

la encargada, según unos documentos oficiales filtrados al *New York Times* a finales de 2019, de supervisar más de una docena de lo que China llama «centros de formación vocacional».

Para muchos gobiernos y asociaciones de derechos humanos de Occidente, se tratan en realidad de «campos de reeducación» donde habrían acabado contra su voluntad más de un millón de uigures —casi el 10% de la minoría musulmana que vive en la provincia— bajo la premisa de acabar con el extremismo religioso tras dos décadas de atentados.

«En Xinjiang sólo hay centros de educación donde te enseñan a amar a China. También aprendes un oficio. Mi sobrino, que estaba confundido por las ideas extremistas que le metieron en la cabeza algunos amigos, entró voluntariamente en uno

de esos centros para estudiar las leyes del país, pero salió cuando quería», explica el dueño de un restaurante musulmán de Turpan.

«Los periodistas extranjeros no estáis haciendo mucho daño con vuestras mentiras. Habláis sin pruebas de campos de internamiento y de trabajo forzoso, diciendo que los uigures somos esclavos en las fábricas y que nos obligan a recolectar el algodón cuando estamos deseando trabajar en esta industria porque se gana más dinero que en otros empleos», asegura un policía apostado en la entrada de unas cuevas con frescos budistas del siglo V. «Estáis provocando que algunas empresas no quieran contratar personal uigur porque tienen miedo a que les relacionen con ese falso trabajo forzoso y que sus clientes extranjeros no trabajen más con ellas», critica.

se les permite hacer declaraciones, siempre supervisadas y sin citar sus nombres. «Se dicen muchas mentiras sobre Xinjiang. Gracias a las medidas que se han tomado, los terroristas han desaparecido y la región se ha desarrollado económicamente», asegura la mujer de la tienda.

La semana pasada, los embajadores en China de EEUU, Alemania y Gran Bretaña participaron en un evento virtual de la ONU, junto con el director ejecutivo de Human Rights Watch, Ken Roth, y la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard. El objetivo fue «discutir cómo el sistema de la ONU, los estados miembros y la sociedad civil pueden apoyar y defender los derechos humanos de los miembros de las comunidades étnicas turcas».

Desde Washington, la Administración Biden utilizó a principios de año el término genocidio para describir la represión de China contra los uigures. Lo mismo hicieron poco después el Parlamento de Canadá y de Países Bajos. En abril, fue la Cámara de los Comunes de Reino Unido la que aprobó una moción que calificaba de genocidio y crímenes de lesa humanidad el trato que ha sufrido la minoría musulmana. El pasado jueves, fueron los legisladores de Lituania los últimos que describieron como genocidio lo que ocurre en Xinjiang.

Sobre el terreno, durante la visita a Turpan, la narrativa está controlada por las autoridades chinas. Los medios estatales llevan más de un mes difundiendo vídeos y reportajes con uigures de Xinjiang hablando en mandarín y criticando las «mentiras» de Occidente. Para dar voz a testimonios sin filtros hay que acudir a los uigures que viven en el extranjero.

«Una mañana de 2018, varios policías aparecieron en mi casa y me llevaron a la fuerza a uno de los centros de Turpan. Allí estuve seis meses porque decían que tenía un amigo que había pertenecido a un movimiento separatista en los años 90», relata desde Kazajistán Oryn, miembro del Congreso Mundial Uigur (WUC), una organización formada por uigures exiliados que para Pekín es una «red separatista dirigida y financiada por Estados Unidos», según la descripción del diario chino *Global Times*.



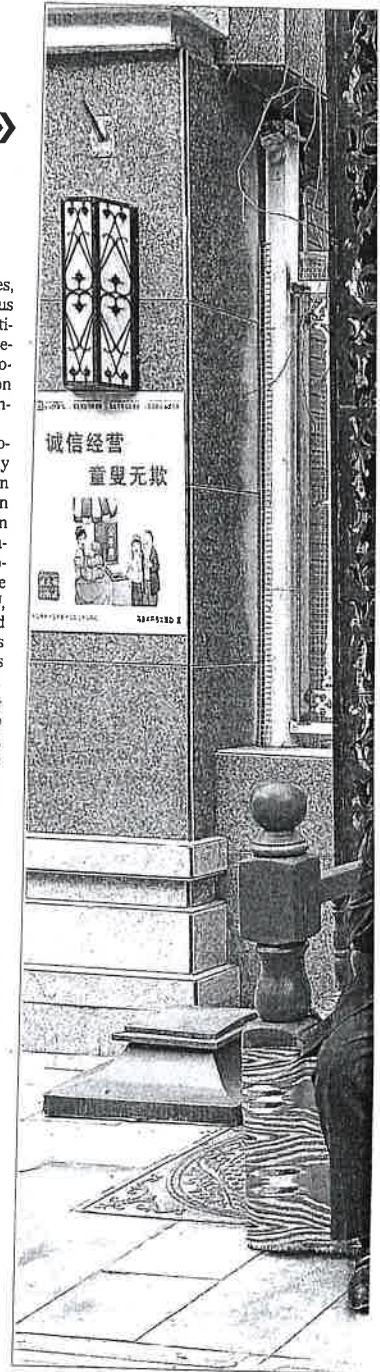
Das mujeres uigures se cruzan en un camino de la provincia de Xinjiang. LUCAS DE LA CAL

**La población sólo puede hablar bajo la supervisión de los funcionarios chinos**

**«Los periodistas extranjeros no estáis haciendo mucho daño», dice un policía**

Durante todo el viaje por la región de Turpan, cuatro funcionarios de la oficina de seguridad nos siguen en dos coches. También se turpan para hacer el seguimiento a pie, guardando una distancia considerable, pero sin ocultarse, cada vez que nos detenemos en alguna parte del camino. Intentar hacer entrevistas aleatorias para preguntar por la situación de los uigures en Xinjiang supone exponer al entrevistado a represalias si accede a hablar con la prensa extranjera.

Únicamente, bajo el visto bueno previo de los funcionarios, al dueño del restaurante, al policía y a una mujer que regenta una tienda de pañuelos y bolsos —todos ellos uigures—



«Me encerraron tres días en una habitación porque me negué a salir al patio por la noche para cantar una canción del ejército. Era como una prisión porque no podíamos volver a casa, aunque yo estuve en un módulo que era como una escuela de adoctrinamiento, estudiábamos mandarín, dormíamos en camas individuales sin hacina- mentos y comíamos todos los días. Otros no tuvieron esa suerte», relata Oryn.





«Mis dos hermanos fueron detenidos en 2017 sin ninguna acusación y llevados a un centro cerca de Urumqi. No he vuelto a saber nada de ellos», asegura Abdu Metmet, que vive en Turquía, un país con una diáspora uigur debido a los vínculos lingüísticos y culturales. Hasta 2019, Pekín negó la existencia de los campos de Xinjiang. Acabó reconociendo que casi 1,3 millones de personas habían recibido «capacitación vocacional» cada año entre 2014 y 2019.

«Sin duda, la lucha contra el terrorismo ha sido efectiva. El problema es que bajo esa política han cerrado durante meses en esos centros a personas por cosas como rezar en sitios públicos. Más tiempo han estado y siguen estando otras personas que tienen algún familiar, por muy lejano que sea, vinculado con el extremismo islamista», dice Audrey Tursun, una abogada uigur de derechos humanos que vive en Francia.

Desde Estados Unidos han llegado testimonios más fuertes como el de Tursunay Ziawudun, que lleva dos años asegurando en entrevistas que estuvo detenida 18 meses en un campo de internamiento de Xinjiang y que vio cómo las mujeres eran sacadas de las celdas todas las noches y violadas por hombres enmascarados. «Mi trabajo consistía en quitarles la ropa por encima de la cintura y esposarlas para que no se movieran», asegura Tursunay. «Entonces,

dejaba a las mujeres en la habitación y entraba un hombre, algún chino de fuera o un policía. Me sentaba en silencio junto a la puerta, y cuando el hombre salía de la habitación, llevaba a la mujer a darse una ducha».

Las tribus de habla turca llevan viviendo un milenio en Xinjiang, donde el islam se convirtió en la religión dominante alrededor del siglo XVI. Cuando el Partido Comunista Chino

**Un hombre  
conversa con  
dos ancianos  
uigures en el  
Gran Bazar  
de Urumqi.**  
LUCAS DE LA CAL

ganó la guerra civil y fundó la República Popular China en 1949, tomó el control de lo que se conocía como la región occidental y en 1955 estableció

la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, siguiendo un modelo que, al menos en teoría, otorgaba a las minorías étnicas autonomía sobre sus propios asuntos. Según los datos recopilados en un extenso informe reciente del diario *South China Morning Post*, la minoría musulmana uigur constituía el 76% de la población de Xinjiang cuando se fundó la actual China. Ahora, según el último censo, los uigures representan el 46%.

«Pekín y las empresas estatales han desarrollado los recursos naturales de la región, como el petróleo crudo, el gas natural y la agricultura, pero el desarrollo económico no ha beneficiado por igual a los uigures y a los de la etnia han. Los estudios muestran que los uigures han sido excluidos en su mayoría de trabajos profesionales y del sector energético con altos ingresos, lo que refuerza la percepción uigur del colonialismo han. También se han quejado de que se enfrentan a prejuicios y discriminación ocasionales en otras partes de China y se les niega el trabajo o se les prohíbe alojarse en hoteles, especialmente en la última década después de disturbios étnicos y una serie de ataques terroristas», reza el informe.

Una oleada de atentados llevó a Pekín a tomar el control absoluto de Xinjiang para acabar con las fuerzas separatistas, lideradas según el Gobierno chino por organizaciones como el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, considerado una organización terrorista por la ONU. Xinjiang se convirtió en un fortín de videovigilancia, controles policiales, arcos de reconocimiento facial en los establecimientos y soldados patrullando las calles de las principales ciudades de la región. Pero el nombre de esta provincia sobre todo se ha repetido estos años por las denuncias de la represión de Pekín contra las minorías musulmanas.

Muchos informes de colectivos de derechos humanos e investigaciones periodísticas hablan de campos de reeducación, trabajo forzoso, destrucción de mezquitas, esterilización forzada, violaciones, torturas... Pekín mantiene que sus medidas se centran en luchar contra el extremismo y reducir la pobreza desarrollando la región rica en recursos en una ruta comercial hacia Asia Central.

Para retratar el origen de la represión que se denuncia contra las mi-

norías étnicas, hay que retroceder hasta abril de 2014, semanas después de que terroristas uigures atentaran con cuchillos en una estación de tren, asesinando a 31 personas y dejando 140 heridos. Entonces, el presidente, Xi Jinping, pronunció una serie de discursos ante los funcionarios de la región: «Los métodos que nuestros camaradas tienen a mano son demasiado primitivos. Ninguna de estas armas es una respuesta para sus grandes cuchillas de machete, hachas y armas de acero frío. Debemos ser tan duros como ellos y no mostrar absolutamente ninguna piedad».

Una serie de documentos gubernamentales publicados por el *New York Times*, explican que los campos de internamiento se expandieron en 2016 tras el traslado desde el Tíbet hasta Xinjiang del político Chen Quanguo, designado nuevo jefe de la región, quién estableció varias guías de cómo se debía actuar: desde enviar a los jóvenes uigures más brillantes a universidades de China —con el objetivo de capacitar a una nueva generación de funcionarios y maestros uigures leales al partido—, hasta explicar a los jóvenes musulmanes que sus familiares detenidos y llevados a «campos de reeducación» habían sido «infectados por el virus del radicalismo islámico y que debían ser

**«Varios policías me llevaron a la fuerza a un centro en Turpan», relata un opositor**

**«Mis dos hermanos fueron detenidos en 2017. No he vuelto a saber nada de ellos»**

puestos en cuarentena y curados».

El año pasado, un informe del Ministerio de Exteriores de Alemania, al que accedió Deutsche Welle, había seguido el rastro de 311 prisioneros uigures que habían acabado en los campos de Xinjiang por «llevar la barba demasiado larga, rezar en público y llamar a sus familiares en el extranjero». Según el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), un *think tank* de Canberra —muy cercano al Gobierno australiano— que ha publicado varios informes sobre la situación de los uigures, desde 2017 China —en base a testimonios e imágenes por satélite— habría construido 380 campos de internamiento en Xinjiang, que irían desde los campos de reeducación de seguridad más bajos hasta cárceles fortificadas. «Los campamentos también suelen estar ubicados junto con los complejos de fábricas, lo que puede sugerir la naturaleza de una instalación y destacar la línea directa entre la detención arbitraria en Xinjiang y el trabajo forzoso», dicen en una de sus investigaciones.